DOCUMENTO EXTRADICIÓN Y NARCOTRÁFICO

A. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL (Ver anexo 1 y 2)

- Colombia cuenta con 12 tratados internacionales bilaterales en materia de extradición con países como: Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, España, Francia, México, Nicaragua, Panamá y Perú.
- Además de dichos tratados de extradición, se han ratificado 8 tratados bilaterales sobre asistencia judicial recíproca con Brasil, Costa Rica, Cuba, Francia, Gran Bretaña, México y Perú.
- De igual manera, se han ratificado 4 tratados bilaterales sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias con: Argentina, Ecuador, España y Panamá.

- En materia de tratados multilaterales, Colombia cuenta con 2 tratados específicos en materia de extradición, además de más de 10 tratados que abordan el tema de extradición sin ser el tema exclusivo del tratado.

- En materia de narcotráfico, las convenciones internacionales también incluyen compromisos específicos en materia de extradición, a saber:
 - **Convención Única de Estupefacientes 1961, artículo 36:**
 - Los delitos graves cometidos en el extranjero, tanto por nacionales como por extranjeros, serán juzgados por la Parte en cuyo territorio se haya cometido el delito, o por la Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente, si no procede la extradición de conformidad con la ley de la Parte a la cual se la solicita, y si dicho delincuente no ha sido ya procesado y sentenciado.
 - Los delitos contenidos en esta Convención (en el presente caso el cultivo y la producción, fabricación, extracción, preparación, posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra, venta, despacho de cualquier concepto, corretaje, expedición, expedición en tránsito, transporte, importación y exportación de estupefacientes) se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre las Partes. Las Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro;
 - Si una Parte, que subordine la extradición a la existencia de un tratado, recibe de otra Parte, con la que no tiene tratado, una solicitud de extradición, podrá considerar la Convención Única de Estupefacientes de 1961 como la base jurídica necesaria para la extradición. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por el derecho de la Parte requerida.

 - **Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971, artículo 22:**
 - Los delitos graves cometidos tanto por nacionales como por extranjeros serán juzgados por la Parte en cuyo territorio se haya cometido el delito, o por la Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente, si no procede la extradición de conformidad con la ley de la Parte en la cual se la solicita, y si dicho delincuente no ha sido ya procesado y sentenciado.
 - Es deseable que los delitos a que se refiere esta Convención se incluyan entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado o que pueda concertarse entre las Partes, y sean delitos que den lugar a extradición entre cualesquiera de las Partes que no subordinen a la existencia de un tratado o acuerdo de reciprocidad a reserva de que la extradición sea concedida con arreglo a la legislación de la Parte a la que se haya pedido, y de que esta Parte tenga derecho a negarse a proceder a la detención o a conceder la extradición si sus autoridades competentes consideran que el delito no es suficientemente grave.

- **Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 1988, artículo 3:**
 - Cada uno de los delitos graves contenidos en esta Convención se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre las Partes. Las Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí.
 - Si una Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe de otra Parte, con la que no la vincula ningún tratado de extradición, una solicitud de extradición, podrá considerar esta Convención como la base jurídica de la extradición. Las Partes que requieran una legislación detallada para hacer valer la presente Convención como base jurídica de la extradición considerarán la posibilidad de promulgar la legislación necesaria.
 - Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica esta Convención como casos de extradición entre ellas.
 - La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.
 - Al examinar las solicitudes de extradición, el Estado requerido podrá negarse a darles cumplimiento cuando existan motivos justificados que induzcan a sus autoridades judiciales u otras autoridades competentes a presumir que su cumplimiento facilitará el procesamiento o el castigo de una persona por razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o que se ocasionarán perjuicios por alguna de estas razones a alguna persona afectada por la solicitud.
 - Las Partes se esforzarán por agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios.
 - A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, la Parte requerida podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud de la Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.
 - Sin perjuicio del ejercicio de cualquier competencia penal declarada de conformidad con su derecho interno, la Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente deberá:
 - a) Si no lo extradita por un delito tipificado de conformidad con esta Convención, presentar el caso ante sus autoridades competentes para enjuiciarlo, salvo que se haya acordado otra cosa con la Parte requirente;
 - b) Si no lo extradita por un delito de ese tipo y se ha declarado competente en relación con ese delito, presentar el caso ante sus autoridades competentes para enjuiciarlo, salvo que la Parte requirente solicite otra cosa a efectos de salvaguardar su competencia legítima.
 - c) Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena se deniega basándose en que la persona objeto de la solicitud es nacional de la Parte requerida, ésta, si su legislación lo permite y de conformidad con los requisitos de dicha legislación, previa solicitud de la Parte requirente, considerará la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta conforme a la legislación de la Parte requirente o el resto de dicha condena que quede por purgar.

B. MARCO JURÍDICO NACIONAL:

- **Artículo 35 Constitución Política de Colombia:** La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.
Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.
La extradición no procederá por delitos políticos.

No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma. (1997)

- **Código de Procedimiento Penal:**

1. *Concesión u ofrecimiento de la extradición:*

○ **Definición de la extradición:**

Mecanismo de cooperación judicial por medio del cual un estado le hace entrega a otro de una persona para que sea sometida a los órganos judiciales del segundo estado. Quedan excluidos de su aplicación los delitos políticos y militares.

Artículo 490 CPP: La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley.

Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por los delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.

La extradición no procederá por delitos políticos²⁶³.

No procederá la extradición de colombianos por nacimiento cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997.

○ **Concesión u ofrecimiento de la extradición:**

Artículo 491 CPP: Corresponde al gobierno por medio del Ministerio de Justicia, ofrecer o conceder la extradición de una persona condenada o procesada en el exterior, salvo en los casos de colombianos por nacimiento cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997.

○ **Requisitos para concederla u ofrecerla:** Artículo 493 CPP: Para que pueda ofrecerse o concederse la extradición se requiere, además:

- Que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años²⁶⁴.
- Que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente.

○ **Condiciones para el ofrecimiento o concesión:**

²⁶³ Es pertinente anotar que ni la Constitución Política ni el ordenamiento penal definen o enumeran un catálogo de delitos políticos. No obstante, existen criterios doctrinarios y jurisprudenciales para que el operador judicial o administrativo pueda determinar en qué casos se encuentra ante conductas punibles que puedan tipificarse como delitos políticos. Bajo tales criterios, los delitos cometidos contra el régimen constitucional y legal se han considerado, tradicionalmente y desde hace varias décadas, como delitos políticos. La Corte Constitucional ha definido el delito político como aquél que, inspirado en un ideal de justicia, lleva a sus autores y copartícipes a actitudes proscritas del orden constitucional y legal, como medio para realizar el fin que se persigue. Y agregó que si bien es cierto el fin no justifica los medios, no puede darse el mismo trato a quienes actúan movidos por el bien común, así escojan unos mecanismos errados o desproporcionados, y a quienes promueven el desorden con fines intrínsecamente perversos y egoístas. Debe, pues, hacerse una distinción legal con fundamento en el acto de justicia, que otorga a cada cual lo que merece, según su acto y su intención. (Corte Constitucional, Sentencia C-009 de 1992)

²⁶⁴ Condición referida al principio de doble incriminación en virtud del cual a nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado.

Artículo 494 CPP: El gobierno podrá subordinar el ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas. En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena.

Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación.

2. *Clases de Extradición:*

○ Extradición Facultativa:

Artículo 492 CPP: La oferta o concesión de la extradición es facultativa del gobierno; pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia.

○ Extradición simplificada:

Artículo 500, PARÁGRAFO 1: La persona requerida en extradición, con la coadyuvancia de su defensor y del Ministerio Público podrá renunciar al procedimiento según el cual se dan 10 días para solicitar las pruebas que se consideren necesarias, 10 días más para la actuación de las pruebas y 5 días para alegar el proceso, y, en contraposición, solicitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de plano el correspondiente concepto dentro de los 20 días siguientes.

3. *Procedimiento:*

El proceso de extradición es el siguiente:

1. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibe de manera formal la solicitud de extradición y la remite al Ministerio de Justicia y del Derecho para que inicié las diligencias y a la Fiscalía General para su trámite, indicando si procede con sujeción a convenciones o tratados internacionales o si debe proceder con sujeción a las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal.
2. El Ministerio de Justicia examina la documentación y si faltan piezas sustanciales lo devuelve al Ministerio de Relaciones Exteriores con indicación detallada de los nuevos elementos de juicio que sean indispensables.
3. Una vez perfeccionado el expediente, el Ministerio de Justicia lo remite a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que ésta emita concepto.
4. Se solicitarán y practicarán las pruebas a que haya lugar.
5. Luego de 25 días de pruebas, la Corte Suprema emitirá concepto, fundamentada en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos. El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.
6. Libertades de obrar del Gobierno:
 - a. **Entrega diferida:** Ésta procede cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia. En este caso, en la resolución ejecutiva que se conceda la extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le

juzgue y cumpla pena, o hasta que por preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso.

- b. **Prelación en la concesión:** Si una misma persona fuere objeto de solicitudes de extradición por parte de dos (2) o más Estados, será preferida, tratándose de un mismo hecho, la solicitud del país en cuyo territorio fue cometida la infracción; y si se tratare de hechos diversos la solicitud que versare la infracción más grave. En caso de igual gravedad, será preferido el Estado que presentó la primera solicitud de extradición.

Corresponde al gobierno establecer el orden de precedencia cuando hubiere varias demandas de extradición.

7. Si la extradición es concedida, la Fiscalía General de la Nación, posteriormente, emite la orden de captura con fines de extradición si no estuviere privado de la libertad, y se entregará a los agentes del país que lo hubiere solicitado en extradición. Una vez emitida, el Estado requirente tiene 60 días para la formalización. El Estado requirente tiene la obligación de remitir los documentos de formalización al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se legaliza la documentación.
8. Si la petición fuere rechazada, el Fiscal General ordenará poner en libertad al detenido.
9. Son causales de libertad: la persona reclamada será puesta en libertad incondicional por el Fiscal General si dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de su captura no se hubiere formalizado la petición de extradición, o si transcurrido el término de treinta (30) días desde cuando fuere puesta a disposición del Estado requirente, este no procedió a su traslado.
10. Una vez perfeccionado el expediente, el Ministerio del Interior y de Justicia lo remitirá al de Relaciones Exteriores para que este, sujetándose a los convenios o usos internacionales, adelante las gestiones diplomáticas necesarias para obtener del gobierno extranjero la extradición.

C. LA EXTRADICIÓN CON ESTADOS UNIDOS:

- Actualmente no hay tratado de extradición vigente entre los Estados Unidos y Colombia toda vez que las leyes aprobatorias expedidas en dos oportunidades fueron declaradas inexecutable por la Corte Suprema de Justicia²⁶⁵. La extradición de colombianos se viene adelantando a través de políticas administrativas y de las facultades legales que existen en cada país.
- La Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en afirmar que, en ausencia de tratado con Estados Unidos, se le da prioridad a la aplicación del derecho interno o a las convenciones internacionales relacionadas con la materia objeto de la solicitud de extradición²⁶⁶. Al respecto ha señalado que: "al no existir tratado de extradición vigente entre los Estados Unidos y la República de Colombia, el trámite de la solicitud de entrega y el concepto a emitir como culminación del mismo, se surte con base en las

²⁶⁵ La primera de ellas, ley 27 de 1980 fue declarada inexecutable por la Corte Suprema de Justicia por vicios de procedimiento toda vez que no fue constitucionalmente sancionada por el Presidente de la República, sino en delegación al Ministro de Gobierno.

La segunda ley, Ley 68 de 1986, fue declarada inexecutable por vicios de forma y trámite, toda vez que el Presidente de la República al sancionar la Ley 68 de 1986 tomó en cuenta una ley que habría desaparecido como consecuencia de la sentencia de inexecutable, que comprende toda la etapa de formación de la misma por lo que la nueva sanción de la ley a la que simplemente se le cambió el número -de 27 de 1980 pasó a ser 68 de 1986-, es también inconstitucional.

²⁶⁶ Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 41274 de 17 de Julio de 2013; Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 41955 de 25 de Septiembre de 2013 (donde se reconoció que el tratado aplicable era la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988); Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 41646 de 31 de Julio de 2013; Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 41363 de 17 de Julio de 2013; Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 41402 de 10 de Julio de 2013; Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 36388 de 27 de Junio de 2012

exigencias contenidas en el Capítulo II del Libro V del Código de Procedimiento Penal Colombiano²⁶⁷, es decir, con el cumplimiento de: i) la validez formal de la documentación allegada por el país requirente, ii) la demostración plena de la identidad de la persona solicitada, iii) la presencia del principio de la doble incriminación y iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con el escrito de acusación de nuestro sistema procesal penal.

- Así mismo, en sentencia anterior también se había reconocido que: “Debido a que no existe tratado de extradición aplicable entre los Estados Unidos y Colombia, según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, y los hechos ocurrieron con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, específicamente entre el 31 de julio de 1998 y el 25 de julio de 2003 como se afirma en la acusación, este trámite de extradición se rige por la Ley 600 de 2000”²⁶⁸.
- De la misma manera, el Consejo de Estado afirmó que: “en el caso específico de la extradición, no existe Tratado, Convención o Convenio, y menos en los términos de reciprocidad alegados por el actor, pues el suscrito el 14 de septiembre de 1979 es inaplicable por cuanto las leyes aprobatorias expedidas en dos oportunidades fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia”²⁶⁹.
- Para el 2008, se dio un canje de notas específico que constituye un acuerdo en materia de cooperación penal sobre “extradición de jefes paramilitares”, cuyo objetivo era facilitar la cooperación judicial mutua con respecto a los 15 ex-cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (“AUC”) que fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales.

D. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN MATERIA DE EXTRADICIÓN RELACIONADA CON PROCESO DE PAZ Y NARCOTRÁFICO:

1. Jurisprudencia sobre extradición de los paramilitares en el marco de la ley de Justicia y Paz:

A partir del 2010 se dio un cambio drástico en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la extradición en un caso relacionado con narcotráfico²⁷⁰. Allí la Corte determinó que, “pese a encontrarse reunidos los presupuestos establecidos en el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, [...]en este caso concreto se configura la presencia de motivos de índole constitucional y legal que impiden conceptuar favorablemente a la extradición del ciudadano EDWAR COBOS TÉLLEZ. Los motivos de fondo encontrados se basaron en que: “(i) Se vulnera el espíritu de la Ley 975 de 2005; (ii) Se desconocen los derechos de las víctimas; (iii) Se traumatiza el funcionamiento de la administración de justicia colombiana; (iv) La gravedad de los delitos cometidos por el ciudadano pedido en extradición es menor respecto de los delitos que se le imputan en Colombia”²⁷¹.

Dentro de los argumentos de fondo, la Corte retomó diferentes posturas sostenidas por ésta misma, por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado, relacionadas con el Proceso de Paz con los Paramilitares y manifestó:

²⁶⁷ Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 40991 de 30 de Abril de 2013

²⁶⁸ Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 39750 de 10 de Octubre de 2012

²⁶⁹ Sentencia de Consejo de Estado Estado - Sección Primera, nº 11001-03-24-000-2001-0292-01(7430), de 22 de Octubre de 2004

²⁷⁰ El 17 de Febrero de 2010 la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de extradición de Edwar Cobos Téllez, alias “diego Vecino” fundamentándose en los mismos argumentos utilizados este Tribunal había rechazado la solicitud de extradición de Luis Edgar Medina, alias “Comandante Chaparro”, desmovilizado del Bloque de Resistencia Tayrona de las AUC.

²⁷¹ Sentencia de Corte suprema de Justicia- Sala de Casación Penal No. 32568 de 17 de febrero de 2010.

- **Extradición en el marco de la ley de justicia y paz:**
 - "Es bien sabido que la Ley 975 de 2005 fue promovida por el Gobierno Nacional haciendo referencia a que la paz como gran propósito nacional no debe tener obstáculos y que en aras de ella se debe "encontrar una adecuada relación, un equilibrio entre justicia y paz, que nos permita satisfacer los intereses de la primera, al tiempo que se avanza de manera audaz y efectiva en la superación de los problemas de violencia que tanto sufrimiento le han causado al país"²⁷².
 - Luego de reconocerse los derechos de las víctimas en el marco de un proceso de paz con los paramilitares²⁷³, la Corte señaló que la extradición impediría el ideal de paz que sirvió para expedir la Ley 975 de 2005 toda vez que, "además de impedir el relato de los crímenes del postulado a través de su versión libre, dejaría huérfanas de protección a las víctimas y sus familiares, al diluirse el aseguramiento de la reparación de los daños, además del conocimiento de lo que sucedió, cómo ocurrió, etc., máxime cuando en delitos de esta estirpe la sola reparación o indemnización pecuniaria no basta"²⁷⁴.
 - Adicionalmente señaló que: "La extradición de los paramilitares sometidos al proceso de justicia y paz ha constituido un golpe de gracia al propósito inspirador de una ley que ha pretendido hacer germinar la paz entre los colombianos y la prueba más fidedigna del descalabro de dicha estrategia gubernamental contra la violencia y los grupos armados ilegales"²⁷⁵.
 - "Pero mientras las autoridades judiciales estén autorizadas para adelantar los procesos especiales previstos en la Ley 975, los postulados estén cumpliendo con su obligación de confesar los delitos cometidos, se estén realizando las audiencias de imputación y se profieren los fallos correspondientes, es deber ineludible de jueces y fiscales hacer prevalecer en el orden interno los principios de verdad, justicia y reparación"²⁷⁶.

- **Obstruccionismo frente a la justicia colombiana:**
 - "Las personas pedidas en extradición que se desmovilizaron y están confesando los delitos cometidos personalmente o por cuenta de su organización criminal, deben concluir sus exposiciones para que la justicia colombiana emita los pronunciamientos definitivos que de ella se esperan"²⁷⁷.
 - "No resulta admisible que un proceso de paz como el promovido por el Gobierno Nacional dirigido a la desmovilización de los paramilitares, pueda quedar supeditado a gobiernos

²⁷² Proyecto de Ley 211, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, Gaceta del Congreso 43, de 11 de febrero de 2005.

²⁷³ "Ha de tenerse en cuenta que las víctimas tienen derechos fundamentales en orden a garantizar (i) la efectiva reparación por el agravio sufrido, a que existe una (ii) obligación estatal de buscar que se conozca la verdad sobre lo ocurrido, y a un (iii) acceso expedito a la justicia, pues así se prevé por la propia Constitución Política, la ley penal vigente y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad". (Proyecto de Ley 211, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, Gaceta del Congreso 43, de 11 de febrero de 2005)

²⁷⁴ *ibid.*

²⁷⁵ Corte Constitucional, sentencia C-370/06

²⁷⁶ Corte Constitucional, sentencia C-370/06

²⁷⁷ Corte suprema de Justicia. Concepto de extradición. Agosto 19 de 2009. Rad. 30451

extranjeros y su buena voluntad de permitir reconstruir la verdad que tanto clama la sociedad colombiana”²⁷⁸.

- "También aparece como elemento perturbador que motiva este concepto desfavorable que las autoridades judiciales colombianas no puedan cumplir los términos procesales en los asuntos que tramita. Ya se han presentado supuestos en los que la ausencia de testigos -extraditados previamente- obligan al aplazamiento de las audiencias programadas con suficiente antelación, con la consecuencia inaudita de generar la aparición de causales de libertad a favor de los procesados, fenómeno al que no habría lugar en el evento de tener a disposición de las autoridades nacionales a los postulados-extraditados”²⁷⁹.

- **Extradición como forma de impunidad:**

- "Dar prevalencia a la justicia nacional en estos asuntos blindo al Estado colombiano frente a la posibilidad de intervención de la Corte Penal Internacional. O, dicho de otra manera: autorizar la extradición de un nacional colombiano requerido en el extranjero por delito de narcotráfico, conociéndose que esa misma persona también debe responder por los más graves delitos de lesa humanidad, constituye una modalidad de impunidad que se repudia desde el mencionado Tribunal Internacional que lo autoriza a intervenir en aquellos Estados que patrocinan tales prácticas”²⁸⁰.
- "En las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras procesales a una persona, debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos. La aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad”²⁸¹.

2. **Extradición de miembros de las FARC**²⁸²:

A diferencia de lo ocurrido con las solicitudes de extradición de los paramilitares, en el caso de las FARC, la Corte Suprema de Justicia²⁸³ ha mantenido una posición en la que se limita a estudiar el cumplimiento de los requisitos de forma establecidos en el Código de Procedimiento Penal. No se han tenido en cuenta criterios como la prevalencia de los derechos de las víctimas, la ponderación de los bienes jurídicos involucrados, la prevalencia de la verdad y la reparación sobre la justicia, entre otros.

²⁷⁸ Corte suprema de Justicia. Concepto de extradición. Agosto 19 de 2009. Rad. 30451

²⁷⁹ Corte suprema de Justicia. Concepto de extradición. Agosto 19 de 2009. Rad. 30451

²⁸⁰ La doctrina es clara en señalar que la inacción, la falta de disposición o la incapacidad de las jurisdicciones nacionales para investigar y enjuiciar los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra cometidos en situación de admisibilidad, posibilitan la intervención de la C.P.I., tribunal que ejerce su primacía material sobre las autoridades judiciales nacionales. Véase Héctor Olásolo Alonso, Ensayos sobre la Corte Penal Internacional, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2009, p. 34 y siguientes; Corte suprema de Justicia. Concepto de extradición. Agosto 19 de 2009. Rad. 30451

²⁸¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, 8 de julio de 2009.

²⁸² Información obtenida de documento elaborado por la Coordinación Jurídica de la OACP

²⁸³ Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 22450 de 24 de noviembre de 2004; Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 22443 de 23 de marzo de 2005.

ANEXO 1 DOCUMENTO SOBRE EXTRADICIÓN
TRATADOS BILATERALES SUSCRITOS POR COLOMBIA

TRATADOS SOBRE EXTRADICIÓN:

PAIS	TRATADO	ENTRADA EN VIGOR
ARGENTINA	Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la República de Argentina NOTA: Aún no ha entrado en vigencia	NO
BELGICA	Convención Adicional al Tratado de Extradición entre el reino de Bélgica y la República de Colombia	13 de Julio de 1968
	Convención de extradición	02 de mayo de 1914
BRASIL	Tratado de Extradición celebrado entre la República de Colombia y la República de Brasil	02 de octubre de 1940
CANADA	Canje de notas que constituyen un acuerdo por el cual se extiende la Convención Complementaria al Tratado de Extradición de 1888 a varios protectorados británicos	01 de agosto de 1934
	Convención Suplementaria del Tratado de Extradición recíproca entre Colombia y la Gran Bretaña	05 de Diciembre de 1930
	Tratado de Extradición de Reos entre la República de Colombia y Gran Bretaña (Canadá)	27 de Octubre de 1889
COSTA RICA	Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la República de Costa Rica	13 de mayo de 1931
CHILE	Tratado de extradición entre la República de Colombia y la República de Chile	4 de Agosto de 1928
ESPAÑA	Protocolo modificadorio a la "Convención de extradición de reos" suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892	16 de Septiembre de 2005
	Acuerdo mediante canje de notas para desarrollar la Convención de Extradición de reos del 23 de julio de 1892 entre la República de Colombia y el Reino de España	25 de mayo de 1992
	Convención de Extradición de reos entre la República de Colombia y el Reino de España	17 de Junio de 1893
FRANCIA	Convención para la recíproca extradición de reos entre la República de la Nueva Granada y la República Francesa	09 de abril de 1850
MEXICO	Tratado de Extradición entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos	01 de Julio de 1937
NICARAGUA	Tratado de Extradición entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Nicaragua	12 de julio de 1932
PANAMA	Tratado de extradición entre el gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá	24 de noviembre de 1928
PERÚ	Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República del Perú, modificadorio del Convenio Bolivariano de extradición firmado el 18 de julio de 1911	16 de Junio de 2010
	Convención de extradición de reos entre los Estados Unidos de Colombia y la República del Perú	13 de marzo de 1873

TRATADOS SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA²⁸⁴

PAIS	TRATADO	ENTRADA EN VIGOR
ARGENTINA	Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República de Colombia y la República Argentina	01 de febrero de 2001
BRASIL	Acuerdo de cooperación judicial y asistencia mutua en materia penal entre la República de Colombia y la República Federativa de Brasil	29 de Junio de 2001
COSTA RICA	Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre el gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Costa Rica	16 de septiembre de 2005
CUBA	Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia penal	03 de Noviembre de 2001
FRANCIA	Convenio de asistencia judicial mutua en materia penal entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República francesa	01 de Abril de 2000
GRAN BRETAÑA	Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre asistencia mutua en materia penal	05 de Diciembre de 1999
	Memorando de Entendimiento entre el gobierno de Colombia y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre asistencia legal mutua para asuntos criminales	27 de Enero de 1992
MEXICO	Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos	04 de Junio de 2001
PERU	Convenio entre la República de Colombia y la República del Perú sobre asistencia judicial en materia penal	09 de Diciembre de 1999

TRATADOS SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

PAIS	TRATADO	ENTRADA EN VIGOR
ARGENTINA	Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la República de Argentina NOTA: Aún no ha entrado en vigencia	NO
ECUADOR	Reglamento sobre el procedimiento de repatriación de personas sentenciadas entre el gobierno de Colombia y el gobierno de la República del Ecuador	07 de mayo de 1994
ESPAÑA	Tratado sobre traslado de personas condenadas entre la República de Colombia y el Reino de España	10 de Abril de 1998
PANAMÁ	Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Panamá	21 de Abril de 1997

²⁸⁴ Cabe mencionar que algunos de los tratados sobre asistencia judicial recíproca exceptúan los procesos de extradición.

ANEXO 2 DOCUMENTO SOBRE EXTRADICIÓN
TRATADOS MULTILATERALES SUSCRITOS POR COLOMBIA

TRATADO	ESTADOS PARTE/ORGANISMOS	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR
Acuerdo sobre extradición	Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela	28 de julio de 1914 (Depósito)
Convención sobre Extradición	Organización de Estados Americanos OEA	26 de diciembre de 1934 (Internacional) 22 de junio de 1936 (Colombia)
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional	Organización de Las Naciones Unidas-ONU	29 de septiembre de 2003 (internacional) 3 de septiembre 2004 (Colombia)
Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas	Organización de Las Naciones Unidas-ONU	11 de noviembre de 1990
Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos	Organización de Las Naciones Unidas-ONU	20 de febrero de 1977 (internacional) 15 de febrero 1996 (Colombia)
Convención internacional contra la toma de rehenes	Organización de Las Naciones Unidas-ONU	3 de junio de 1983 (internacional) 14 de mayo de 2004 (Colombia)
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil	Organización de Las Naciones Unidas-ONU	26 de enero de 1973 (internacional) 04 de diciembre de 1974 (Colombia)
Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves	Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves	14 de octubre de 1971 (internacional) 03 de agosto de 1973 (Colombia)
Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal	Organización de Estados Americanos OEA	14 de abril de 1996 (internacional) 13 de febrero de 2003 (Colombia)
Protocolo facultativo relativo a la Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal	Organización de Estados Americanos OEA	04 de julio de 2002 (internacional) 13 de febrero de 2003 (Colombia)
Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil Internacional, complementario del convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971	Organización de la Aviación civil internacional –OACI-	06 de agosto de 1989 (internacional) 13 de febrero de 2004 (Colombia)
"Reglas de procedimiento y prueba" y "elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional"	Corte Penal Internacional	09 de septiembre de 2002 (Internacional y Colombia)